

## **NOTAS DE PRENSA ANEC SEPTIEMBRE 2014**

### **Crecen costos de maíz, trigo, frijol y sorgo; piden reacción gubernamental Pérdidas y deudas, cosecha de dos años de trabajo de productores de granos**

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada

Lunes 15 de septiembre de 2014, p. 18

"Dos años de buena producción y nos va de la fregada." Lo anterior refleja el sentir de los productores de maíz, frijol, trigo y sorgo que por segundo año consecutivo se quedan con deudas y sin ganancias por la caída de precios de los granos. Es el acabose, dicen, ya sólo nos queda "si Dios quiere"; los focos rojos están encendidos, pero las autoridades no reaccionan; todo lo dejan al mercado, agregan.

El precio del maíz, principal grano para los mexicanos, a cuya siembra se dedican 3.2 millones de campesinos en siete millones de hectáreas, acumula un desplome de 50 por ciento en tres años, mientras los costos de producción aumentaron 45 por ciento. Las cosechas son buenas, pero ni así se salvan de caer un escalón más hacia la pobreza.

Producir una tonelada de maíz cuesta 2 mil 82 pesos; en cambio, el precio está entre mil 800 y 2 mil 200 pesos. Quienes logren ganancias tendrán que destinarlas a pagar los créditos solicitados para la compra de semillas y fertilizantes. Los esfuerzos de los campesinos –reflejados en una productividad que oscila entre 3.3 y 8 toneladas por hectárea– se diluyen.

“La mayoría no podrá sembrar para el próximo ciclo por las deudas que arrastra, la continuidad de los bajos precios y la imposibilidad de encontrar compradores por la sobreoferta del grano. Será un cierre de año problemático, advirtieron Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, y Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).

Ambos consideran que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) debe atender "este grave problema de rentabilidad" con mecanismos que no se limiten a la agricultura de contrato –la cual abarca sólo a un pequeño porcentaje de los agricultores– y coberturas de precios, sino con una ampliación de las compras de Diconsa, el impulso a los almacenes del sector social y el ordenamiento del mercado.

El caso de los productores de trigo también es dramático. Olegario Carrillo, dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), expresó que los agricultores no encuentran alternativas para salir de las dificultades. Los integrantes de la sociedad de producción rural a la que pertenece en Sonora, por sembrar el cereal, dice, hemos logrado rendimientos de 8 toneladas por hectárea, pero "en este año nos fue muy mal por el clima y sólo logramos 5.8 toneladas, y además el precio es muy malo".

Los más de 85 mil agricultores de Sonora, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Durango, Jalisco y estado de México realizaron un esfuerzo para elevar la productividad, pues para el cierre del año se prevé una producción de 3.8 millones de toneladas, como resultado de las siembras en 723 mil hectáreas; sin embargo, el precio menor a los 3 mil pesos por tonelada, los desalentó. "Ni las coberturas de precio ni los subsidios nos ayudan a aminorar las pérdidas; para muchos es el acabose. Estamos ante una hecatombe y el gobierno sigue con la misma política", acotó Carrillo.

El panorama para los productores de sorgo también es de tormenta económica, pues entre 2013 y 2014 el precio cayó 17 por ciento, al colocarse en 2 mil 300 pesos por tonelada, explicó Alfredo Velázquez, de la agrupación Observatorio de Precios.

La principal materia prima para la elaboración de alimentos balanceados para aves, bovinos y porcinos ha ganado superficie para su cultivo en Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, donde se produce 80 por ciento de la oferta nacional; el resto lo aportan Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León y Veracruz.

Entre el año pasado y el actual, la superficie sembrada pasó de 1.6 a dos millones de hectáreas y la producción de 6.3 a 8 millones de toneladas; Tamaulipas rompió récord con 2.5 millones de toneladas.

En el caso del frijol, agregó, hay 180 mil agricultores de Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango y Chihuahua afectados por el declive de los precios, fenómeno que afrontan desde 2010, pero además no están dentro del programa de agricultura por contrato. Su costo de producción por hectárea es de 7 mil 600 pesos y el precio del mercado está entre 6 mil y 7 mil pesos por tonelada, la ganancia es menor a dos mil pesos por tonelada, insuficientes para cubrir sus gastos de operación, expuso.

Para atender la tendencia negativa de los precios al productor, Sagarpa a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) apuntó que, con el fin de proteger los ingresos de los productores están la agricultura por contrato y el uso de coberturas. De esa forma el productor asegura un precio piso y el comprador uno techo. En el caso del maíz, para el ciclo otoño invierno 2013-2014 registró contratos por 4 millones 52 mil toneladas y para el de primavera-verano 3 millones 987 mil toneladas.

Para el frijol aprobó dar un apoyo directo al productor de dos pesos por kilogramo para compensar las pérdidas por calidad, más 1.50 pesos por kilogramo para cubrir gastos de operación por acopio. Además, casi la totalidad de la producción de trigo está cubierta por el esquema agricultura por contrato.

<http://www.jornada.unam.mx/2014/09/15/politica/018n1pol>

## **Está el campo mexicano en las garras del capital internacional**

### **REPORTAJE ESPECIAL/ LA CRÓNICA DE CHIHUAHUA**

**La Crónica de Chihuahua**

**18 de septiembre de 2014**

**facebook @twitterMartín Morales Silva**

Si se contempla hacer en México una reforma agraria con el punto de vista estrictamente capitalista, la modernización consistirá en la apertura del campo a los mercados que dominan las transnacionales agroalimentarias de exportación y hacerlo productivo y competitivo con base en someter a los productores al pago de biotecnología moderna que afectará el medio ambiente y será peligrosa para la salud de los mexicanos.

También implicará obligar a los campesinos de ejidos y comunidades rurales –la mayoría indígenas– a vender sus tierras a empresas agropecuarias privadas que después los contratarán como jornaleros, que los condenarán a emigrar a Estados Unidos o a convertirse en trabajadores de mano de obra barata en actividades petroleras, gaseras, hidrológicas, mineras, de construcción y empresas de servicios.

Así se perfila la próxima reforma estructural del campo mexicano, cuya parte medular consistirá en una nueva reforma al Artículo 27 constitucional en materia de propiedad social de la tierra, será complementaria de la reforma energética recién aprobada por el Congreso de la Unión y profundizará la orientación capitalista y monopólica de las demás reformas estructurales.

Es decir, la reforma agraria del Presidente de la República Enrique Peña Nieto no tendrá el sentido esperado por los empobrecidos ejidatarios y comuneros del centro y sur del territorio, que esperaban una reforma encaminada a devolver al campo mexicano las características propias del campesinado dedicado a la producción para el autoconsumo y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria nacional.

En el marco del 99 aniversario de la Ley del 6 de enero –la reforma agraria impulsada en 1915 por Venustiano Carranza, hacendado coahuilense y entonces Presidente de la República– el 6 de enero de 2014, el actual primer mandatario mexicano anunció una reforma estructural para “modernizar al campo”, cuyo objetivo sería transformar el marco jurídico del sector agropecuario para hacerlo más justo, productivo, rentable, sustentable y competitivo a escala internacional.

Tan amenazante resultó el anticipo de la próxima reforma –la doceava en lo que va del sexenio– que diversas organizaciones campesinas, ambientales y civiles se agruparon en el Frente Nacional el Campo es de Todos (FNCT), a fin de evitar la modificación del Artículo 27 de la Constitución, que terminará por desbaratar la propiedad social de la tierra y despojar a sus empobrecidos poseedores.

Los integrantes del FNCT temen que la reforma de Peña Nieto sea una profundización de la reforma agraria de 1992, promovida por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien declaró terminado el reparto agrario y modificó el Artículo 27 constitucional para que ejidatarios y comuneros pudieran vender legalmente sus parcelas y tierras comunales, objetivo que a la fecha (22 años después) sólo se ha logrado en el 2.5 por ciento de esas propiedades comunitarias.

La intención de fondo de la reforma salinista fue, desde entonces, fomentar la explotación capitalista en el campo, no obstante, los campesinos mexicanos han resistido calladamente a esa reforma con obediencia a los valores tradicionales de su propia cultura ancestral y ecológica, coincidieron Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Alejandro Cruz de la organización Maíz y Adelita San Vicente, vocera de la organización Sin Maíz no hay País.

La codicia de las transnacionales

El interés económico por las 103.88 millones de hectáreas de tierras de propiedad social está centrado en su enorme riqueza, pues contienen el 80 por ciento de los bosques y selvas del país; el 74 por ciento de la biodiversidad; las dos terceras partes de los litorales del país y 22.5 millones de hectáreas cultivables, que no producen a todo su potencial por falta de apoyo del Gobierno, cuyo desinterés se debe indudablemente al propósito de modificarles el régimen de propiedad.

A las riquezas ya enumeradas deben sumarse los yacimientos de agua, petróleo, gas y minerales que hay en el subsuelo de estas tierras de propiedad social, así como su posición estratégica para el paso de poliductos, instalaciones de geotermia, minas o tendidos de transmisión de electricidad, entre otros.

De acuerdo con datos oficiales consultados por este semanario, en México existen actualmente cinco millones 222 mil ejidatarios y comuneros –titulares y herederos–, quienes poseen 31 mil 785 núcleos agrarios, distribuidos en 103.88 millones de hectáreas, que representan el 53 por ciento del territorio nacional, cuya extensión total es de 196 millones de hectáreas. Se trata de 29 mil 442 ejidos y dos mil 343 comunidades agrarias. La suma de éstos es equivalente al territorio de Venezuela; dos veces el de España y 1.5 veces el de Francia.

Las entidades con más núcleos agrarios son Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, coincidentemente las entidades con población más pobre de México y donde los titulares actuales, alrededor de cuatro millones de ejidatarios y comuneros, poseen extensiones de cinco hectáreas en promedio, mismas que están abandonadas o subutilizadas “gracias” a las políticas agrarias del Gobierno federal, que ha concentrado sus financiamientos y programas productivos, entre ellos Procampo, en los 500 mil productores privados del país, especialmente los del Norte de México.

“En el Sur, donde tenemos la mayor cantidad de recursos, agua y tierra, la mayoría de los campesinos siembran para el autoconsumo, no son beneficiarios de apoyos para sembrar y llevar sus productos al mercado; siembran para comer, caso diferente de los productores del norte, que producen para el mercado. El Gobierno ya no quiere que se produzcan alimentos, porque considera que es más barato traerlos del extranjero; ¿entonces, qué pasa? Que la tierra tendrá otro fin”, comentó Alejandro Cruz, dirigente de la organización Maíz.

#### Leyes para beneficiar al gran capital

Para los dirigentes campesinos, la propuesta contemplada en la reforma energética para que los corporativos privados “negocien” con los ejidatarios el uso de sus tierras es una pantalla. Alejandro Cruz resaltó que para garantizar la explotación de las zonas rurales ejidales y comunitarias se requiere una reforma al 27 constitucional, misma que suponen vendrá dentro de la anunciada reforma estructural del campo. “En la reforma energética ya dejaron planteado que las actividades energética, minera, geotérmica y eléctrica, tendrán prioridad sobre cualquier otra actividad; es decir, que son más importantes que producir alimentos”.

“Cuando una trasnacional se acerque a pedirle su tierra a los ejidatarios o comuneros para explotar, por ejemplo, energéticos, el ejidatario no podrá decir que no, porque si lo hace el corporativo puede acudir ante un juez para exigir el cumplimiento de la supremacía de la actividad energética. Pero esto va en contra de la misma Constitución, en la que se dice que debe garantizarse la seguridad de la propiedad social; por eso necesitan modificar el régimen de tenencia social de la tierra”.

“Con la reforma al 27 constitucional van a tratar de hacer legales las leyes secundarias de la reforma energética; por eso las organizaciones del FNCT hicimos una marcha el 23 de julio y estamos creando un movimiento que detenga esa reforma al 27, para evitar el despojo de tierras”.

Víctor Suárez, dirigente de la ANEC, señaló: “La reforma energética colocó al campo en una condición secundaria respecto a las prioridades del desarrollo nacional, para favorecer el despojo de los recursos naturales; eso está previsto en la contrarreforma energética, ahora quieren complementar la reforma al 27 constitucional de 1992, con la destrucción, la privatización, de la propiedad social de la tierra, del ejido y la comunidad agraria.

“Esto favorecerá la pérdida de la soberanía alimentaria, cuyo objetivo es satisfacer al 100 por ciento la demanda interna de alimentos, para no depender del extranjero, ya que el control del sistema alimentario quedará en manos de las trasnacionales agroalimentarias”, añadió Suárez.

#### Los beneficiarios

Las empresas trasnacionales buscan el lucro sin medida y entre ellas destacan Monsanto, Syngenta, Cargil, Dupont, ADM, Dow Agrosciense, BASF, Dreyfus y Bunge, que dominan el mercado de las semillas, pesticidas, agroquímicos y fertilizantes.

Monsanto domina el mercado internacional de semillas transgénicas, entre ellas las de maíz, modificadas genéticamente por medio de biotecnología para obtener mayor rendimiento productivo y de capital, pese al peligro sanitario y ambiental que implican.

Estos corporativos tienen presencia en México y esperan ampliar sus actividades. Las oficinas de Monsanto y Cargill están en Santa Fe, Distrito Federal; Pioneer Hi-Bred International, subsidiaria de DuPont, cuyos lemas son “juntos podemos alimentar al mundo” y “los milagros de la ciencia”, está en la colonia Chapultepec Morales del DF.

Las de Syngenta, en la colonia del Valle; Dow Agroscienses, subsidiaria de Dow Chemical, tiene su central en Zapopan, Jalisco; BASF (Bayer Cropscience), cuyo lema es “ayudando a alimentar un planeta con hambre”, en la colonia Granada, cerca de Polanco. ADM tiene su planta en Gómez Palacio, Durango; Bunge Limited o Bunge Foods de México está domiciliada en la colonia San Miguel del DF y en 2013 compró los molinos de Grupo Altex, S. A. de C. V.

Otras empresas trasnacionales son Nestlé, la compañía agroalimentaria más grande del mundo –elabora la marca Nescafé– y los corporativos mexicanos con presencia en Latinoamérica como Bimbo, que produce panes y pasteles industrializados; Maseca (harina de maíz), Bachoco (avícola), Gamesa (galletas), Grupo Modelo (cerveza) y Sabritas (botanas y frituras de maíz).

Entre las trasnacionales dedicadas a explotar petróleo y gas resaltan Shlumberger, Halliburton – que también se dedica a reconstruir ciudades devastadas por el ejército estadounidense y recuperar zonas petroleras–; Exxon, Shell y Chevron. Una de las principales generadoras y conductoras de electricidad es la española Iberdrola y entre las comercializadoras de agua potable figuran FFC y Veolia.

Las empresas mineras más relevantes son la First Majestic Silver Corporation, que extrae plata y que el pasado 26 de agosto empezó a cotizar en el mercado local de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); Goldcorp, que explota oro y es de la misma nacionalidad; el corporativo minero local Grupo México –responsable de la contaminación del río Sonora– y Arcelor Mittal, que produce hierro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y es el principal proveedor de acero de Estados Unidos.

#### Empresas sin escrúpulos

Monsanto es una trasnacional que se ha ganado el aborrecimiento popular y oficial por sus abusos en países latinoamericanos como Venezuela, donde ha usado su ejército privado (el corporativo de seguridad Blackwater (a veces adopta otros nombres como Xe-Services), que protege bienes empresariales. Los principales accionistas de Monsanto son las familias de

banqueros Rothchild y Rockefeller, la primera de Inglaterra, con ascendencia judía y la segunda estadounidense; el magnate George Soros y, más recientemente, el dueño de Microsoft, William Gates.

Monsanto tiene un largo y negro historial criminal; fue propietaria de los laboratorios del Distrito de Ingeniería Manhattan, integrados al Proyecto Manhattan, que desarrolló las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón, poniendo fin, con este genocidio, a la Segunda Guerra Mundial. Los Rothchild y Rockefeller formaron parte del grupo de familias que financiaron ese proyecto criminal.

Monsanto creó y comercializó durante décadas el famoso insecticida DDT, declarado tóxico desde 1972 y que en mayo de 2005 fue incluido en la lista de los 12 compuestos más peligrosos para la humanidad por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con base en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Otro producto tóxico, también de Monsanto, es el PCB, usado en aceites industriales.

Hay evidencias de la peligrosidad sanitaria de sus semillas transgénicas, entre ellas las de maíz, arroz y algodón, así como sus correspondientes plaguicidas y herbicidas, hechos también sobre diseño genético. Especialistas de la Unión Europea (UE) denunciaron sus efectos dañinos para la ecología y la salud humana –son cancerígenos– y en 2013 la UE prohibió sus productos y expulsó de su territorio a Monsanto, aunque ahora hace operaciones con Pioneer de DuPont para que la UE le reabra el mercado europeo a sus mercancías.

El estudio del PNUMA sobre los insecticidas advierte que “los plaguicidas y productos químicos industriales peligrosos pueden matar a la gente, producir daños en el sistema nervioso e inmunitario, provocar cáncer y desórdenes reproductivos, así como perturbar el desarrollo normal de lactantes y niños”.

El grupo de especialistas que elaboró este diagnóstico señaló que los 12 compuestos contraindicados “son altamente tóxicos, estables y persistentes, y tienen una duración de décadas antes de degradarse; se evaporan y se desplazan a largas distancias a través del aire y el agua, y se acumulan en el tejido adiposo (graso) de los seres humanos y las especies silvestres”, provocando enfermedades. Sin embargo, las transnacionales usan singulares lemas para sus negocios agroalimentarios como el de Monsanto: “sacar más alimentos de una gota de lluvia”.

### Devastación del medio ambiente

Las empresas transnacionales encubren publicitariamente sus actividades mientras diversifican sus formas de acumulación de capital. Participan en las bolsas de valores de todas las naciones del mundo, entre otras, en los mercados de commodities, de materias primas como petróleo, gas, oro plata y, desde luego, granos básicos como maíz, soya y trigo, que para aquéllos son

como petróleo crudo para fabricar gasolina. Vistas así, las necesidades alimentarias de la humanidad son secundarias, aunque la publicidad de los corporativos señale lo contrario.

Como parte del agronegocio (agribussines) buscan la eficiencia económica a cualquier costo, por encima de daños sanitarios y ecológicos; acaparan toneladas de “materias primas” alimentarias de acuerdo con sus necesidades financieras, dado que cotizan en las principales bolsas de valores del mundo, entre ellas la de Nueva York. Los capitalistas más especulativos incluso venden producciones agrícolas futuras, esto es, toneladas de granos que todavía no se cultivan ni cosechan, pero cuya existencia y conservación prevén por medio del uso de tecnología, es decir, con manipulación genética.

Consiguen la subordinación de productores al generar una dependencia a sus insumos agrícolas como fertilizantes, semillas híbridas y transgénicas, con sus respectivos fertilizantes y pesticidas, que son diseñados para formar “paquetes tecnológicos” que deben adquirirse bajo contrato. Las tierras se intoxican, sólo responden a las semillas genéticamente modificadas y de esta manera los corporativos se apoderan de la comida mundial y van transformando a los productores en peones.

Las semillas naturales, autóctonas o ecológicas, como las del maíz, permiten su cultivo de manera infinita; las diseñadas tecnológicamente, no. Si se planta la semilla de segunda generación no produce nada. Así obligan al agricultor a comprar a la transnacional la semilla y sus paquetes tecnológicos todos los años. Esas semillas pueden ser híbridas, es decir, combinaciones de dos o más especies, o bien transgénicas, modificadas genéticamente, y no sólo con genes de otras especies de semillas sino incluso con genes animales.

Los antecedentes están en la “revolución verde” de los años 50, pero fue en 1999 cuando empezaron a patentar sus productos genéticamente modificados, amparados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual establecido por la Organización Mundial del Comercio.

En México, la autorización para sembrar transgénicos se encuentra en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas han conseguido detener –hasta ahora– su utilización plena, aunque la reforma al campo agilizaría la entrada de ese tipo de cultivos.

El mecanismo sería una profundización de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, aprobada en 2005, cuyo reglamento se publicó en 2008, mientras que el 6 de marzo de 2009 tocó el turno al Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Bioseguridad, con el que se estableció el Régimen de Protección Especial al Maíz y se autorizó al inicio de plantaciones a partir de septiembre de ese año, mismo que está suspendido y corporativos como Monsanto pelean por destrabarlo.



Detrás de la nueva “reforma agraria” está la visión del capitalismo trasnacional, representado por un puñado de corporaciones trasnacionales de la industria agrícola, alimentaria, energética y de recursos naturales como la biodiversidad y el agua, para quienes todos los productos – incluidos los alimentos– deben generar rendimientos al capital sin reparar en la destrucción del medio ambiente y el empobrecimiento de la población.

<http://www.cronicadechihuahua.com/El-campo-mexicano-en-las-garras,30981.html>

### **Hacer que 80% del financiamiento público llegue a medianos y pequeños productores, plantean en foro**

**Posted on sep 20, 2014**

\*El campo de Guerrero no ha sido prioritario para los gobernantes en los últimos 30 años, advierte Víctor Suárez. El poder de los pobres está en la organización, señala Raúl Olmedo, investigador de la UNAM

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Sur

El director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec) y activista en la campaña Sin maíz no hay país, Víctor Suárez Carrera, advirtió que no tiene caso luchar por más presupuesto para el campo, si no consiguen que al menos 80 por ciento del financiamiento llegue a los medianos y pequeños productores.

Como ponente en el Foro Popular para el Desarrollo del Estado de Guerrero, que se realizó en el Congreso local, recomendó a los dirigentes de organizaciones que conforman el Frente Popular, y que están impulsando la construcción de un presupuesto participativo para el campo en 2015, que hagan un convenio con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, para verificar la aplicación transparente del financiamiento público y una efectiva rendición de cuentas.

Por su parte, el académico de la UNAM, Raúl Olmedo Carranza, destacó en su intervención que el poder de los pobres está en la organización, y la comunidad —como un cuarto orden de gobierno— tiene que ser la célula básica de la organización política del Estado mexicano, porque es ahí donde se pueden discutir y tomar decisiones todos días.

Subrayó que el Estado como lo conocemos ahora es un obstáculo para el desarrollo, las estructuras de la administración pública son un “lastre” que se replica, el centralismo en cada orden de gobierno; por eso se debe luchar para incluir en la Constitución del estado a la comunidad como el cuarto orden de gobierno.

El activista Suárez Carrera, que también participa en la defensa de una agricultura de soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC), habló de los desafíos para el desarrollo sustentable de Guerrero.

Aseguró que si los guerrerenses no saben responder adecuadamente a esos desafíos, “difícilmente podemos hacer cambios que signifiquen algo para la gente, seguiremos haciendo más de lo mismo, con los mismos resultados”.

Como antecedente, señaló que el campo de Guerrero no ha sido prioritario para los gobernantes en los últimos 30 años, y en diciembre la federación aprobó una reforma en materia de energía que establece como primera prioridad en el uso del suelo y subsuelo en todo el territorio nacional la explotación del petróleo y gas, en segundo sitio las actividades mineras, y en tercero el turismo.

Esto significa que si en una reserva de la biosfera o una zona de recarga de acuíferos se encuentra un yacimiento de petróleo y gas, las empresas extranjeras podrán solicitar permiso de aprovechamiento y nadie podrá oponerse porque la Constitución reformada da prioridad al uso de los hidrocarburos.

Asimismo, señaló que los tres niveles de gobierno han impuesto una idea falsa de que los campesinos y los indígenas son gente pobre, improductivos, son demasiados y sobran, “nos han puesto esa etiqueta, pero hemos producido los alimentos que ha requerido el país en su historia”.

Subrayó que los pueblos tienen que cambiar esta política pobrista y victimista que se impuso desde el poder, porque “si nosotros no abandonamos esa idea, nada va a cambiar, tenemos que autoreconocernos con capacidades productivas, con derechos, porque ningún derecho se ha dado de los de arriba a los de abajo, todo derecho se dio por una lucha”.

Asimismo, pidió dejar atrás la política individualista de los programas públicos, sobre todo en un estado rico en organización y colectividad como Guerrero, “al gobierno le da pavor tratar con organizaciones, prefiere tratar con individuos, para que cada quien se rasque con sus propias uñas; (así) se ha debilitado el tejido social, a la comunidad, porque todas las políticas son de atención individualizada”.

Consideró que los pueblos organizados deben exigir programas para colectivos, no para individuos, para romper este ciclo de marginación y asistencialismo que trastoca la autonomía y la dignidad de las personas que se acostumbraron a extender la mano.

Añadió que para el gobierno no es rentable producir los alimentos en el país, y el desafío de la sociedad organizada es cambiar la política de dependencia por una de autosuficiencia alimentaria, donde los estados, las regiones, las comunidades y las familias, “hasta donde sea posible”, tengan capacidades para producir sus propios alimentos, “si no logramos eso, cualquier dinero que llegue a la bolsa se va, porque tenemos que comprar alimentos cada vez más caros”.

Insistió en que los subsidios sólo sirven para profundizar la pobreza y el caciquismo, porque 70 por ciento del financiamiento público se canaliza a los productores ricos, “muy vinculados a caciques y políticos”.

Por su parte el académico Raúl Olmedo Carranza destacó que en los años 70, México pasó de la autosuficiencia a la dependencia alimentaria, la banca de extranjerizó hace tiempo, se tiene concesionado 35 por ciento del territorio nacional a las mineras, y prácticamente (con la reforma energética) perdimos el petróleo.

Añadió que “ya nomás falta perder los calzones y empinarse; pero yo creo que no nos va a gustar y vamos a reaccionar, (porque) hemos perdido seguridad, impartición de justicia, educación y la democracia es un mecanismo para elegir al próximo dictador, que explota y vende los recursos del planeta”.

<http://suracapulco.mx/archivos/209089>

### **FDC lleva a cabo la Asamblea Estatal del Consejo Campesino en Cuauhtémoc**

**JesusNava September 22, 2014 0**

### **FDC lleva a cabo la Asamblea Estatal del Consejo Campesino en Cuauhtémoc**

Chihuahua, Chih. Este domingo 21 de septiembre tuvo verificativo La Asamblea Estatal del Consejo Campesino, evento realizado en Cd. Cuauhtémoc por el Frente Democrático Campesino (FDC), donde acudieron varias personalidades como: Víctor Suarez Carrera, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC), Alberto Arroyo Representante de la red mexicana contra el Tratado de Libre Comercio, Xaviera Cabada Coordinadora de Salud Alimentaria en El poder del consumidor, A.C., Nathalie Seguin Tovar de Alianza mexicana Contra el Fracking, el Presidente municipal de Riva Palacio y desde luego Fernando Ortega Coordinador del Frente en Chihuahua.

En su intervención Víctor Suarez dejó claro que la situación que se presenta ahora para los productores es complicada, ya que los precios del maíz, del trigo, del frijol van a caer aún más y la comercialización se va a poner toda vía más difícil de lo que fue en el ciclo pasado.

Por lo que pidió se haga un análisis de este contexto que se presenta y luchar por mejorar la misma informándose y tomando decisiones en conjunto para revertir algunos de los puntos más críticos que están ocasionando no solo la baja en los precios de los productos, sino problemas ocasionados por acciones que dañan en mucho al productor, como los bajos precios al vender su producción, pero encarecimiento de los mismos productos al llegar al consumidor.

Dijo que ahorita es el momento para unirse y lograr revertir esto, y lograr una certidumbre en los precios en base a colocar en el mercado los productos mexicanos, y desde luego luchar por

detener la importación del extranjero de mercancías que desplazan a las nuestras como sucede con el frijol, la manzana, entre otros.

Además se trataron temas como la inducción a una mala alimentación, y sus efectos negativos en la sociedad, el favoritismo de los medios de comunicación hacia empresas transnacionales que buscan una dependencia de productos no sanos y mucho menos nutritivos.

La realidad del tema del Fracking, que se pretende implementar para la extracción del gas shale, su impacto ambiental y económico, así como el tema de las reformas recientemente implementadas.

Frenando Ortega en su participación dijo que el Frente desde sus inicios se ha caracterizado por la defensa de causas justas, por proponer pero también por protestar cuando las cosas no van bien, abordando el tema del tratado de libre Comercio que no ha beneficiado a productores ni al país, siendo esto únicamente para beneficio de unos cuantos, creando una dependencia alimentaria del 50%, siendo esos productos de procedencia estadounidense los cuales han provocado en su mayoría, obesidad, enfermedades y cáncer.

Además de una falta de políticas públicas enfocadas a la producción de alimentos para tener una soberanía alimentaria propia, falta apoyar al campesino con buenos créditos, con combustibles baratos para poder producir, amén de los precios de las cosechas los cuales están por los suelos y no garantizan una utilidad para el productor.

En pocas palabras si no se produce en México lo necesario es porque no hay las condiciones para ello, no porque no sepan cómo hacerlo los campesinos, finalizó.

Cabe señalar que asistieron Directores de Desarrollo Rural de varios municipios, Comisariados Ejidales, representantes de diversas comunidades, representantes de los municipios de Chihuahua, Satevó, Sta. Isabel, Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Cuauhtémoc, Cusihuirachi, Bocoyna, Guerrero, Madera, Ocampo, Moris, Temósachic, Bachíniva, Namiquípa, Gómez Farías, Zaragoza y Buenaventura.

Jesús Nava Macías

<http://arribaelfcampo.com.mx/sitio/?p=27766>